



BOLIVIA: LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS MERCADOS ILÍCITOS Y LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL

ZONAS DE PENUMBRA Y VULNERABILIDAD DEL ESTADO

Autores:
Henry Oporto/Ricardo Calla

Mayo de 2026

Este artículo sintetiza una investigación llevada a cabo en Bolivia, en el marco del proyecto **Redes en la sombra. Crimen Organizado Transatlántico y la Influencia Autoritaria en América Latina**, conducido por la fundación europea Centro para el Estudio de la Democracia (CSD) con la colaboración de varios centros de pensamiento de Latinoamérica.

La responsabilidad de este artículo es exclusiva de sus autores.

SUMARIO

Introducción

El perfil de la industria boliviana de la droga

Política de control social y la gobernanza local

Clanes familiares y conexiones internacionales

El negocio floreciente de la minería ilegal

Criminalidad y cooptación del Estado

Amenazas autoritarias latentes

¿Momento de inflexión?

Estrategia de seguridad integral

Introducción

Bolivia se ha caracterizado en las últimas dos décadas (2006-2025) por la vigencia de un régimen autocrático, nacionalista y corporativo, alineado con los gobiernos de izquierda del llamado “socialismo del siglo XXI”. En el ámbito de la política mundial, el régimen boliviano forjó relaciones cercanas y de estrecha colaboración con China, Rusia e Irán; potencias interesadas en expandir su presencia geoeconómica y su influencia geopolítica en América Latina y el Caribe.

Un rasgo singular del régimen implantado en Bolivia, en 2006, por el líder indigenista Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), fue haber sustentado en gran medida su política económica en los beneficios derivados de la industria del narcotráfico, el contrabando en gran escala y otros negocios ilícitos florecientes, todos ellos con un marcado sesgo transnacional.

De hecho, la evolución de la economía de la coca-cocaína pone de manifiesto un cambio sustantivo del papel de Bolivia en la geopolítica de las drogas: en vez de estar controlado por cárteles integrados verticalmente, tal como sucedió en Sudamérica en décadas pasadas, el comercio de Bolivia ha tendido a organizarse a través de alianzas fluidas y en estructura mayormente de redes. Se trata de clanes familiares que gestionan la producción y la logística local, mientras que organizaciones como el PCC, el Comando Vermelho, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo y otros, operan como agregadores, mientras que grupos delincuenciales como 'Ndrangheta de Italia y las mafias balcánicas intervienen en el transporte y la distribución de drogas en los mercados europeos y del Pacífico. Se evidencia así que la globalización ha transformado el crimen organizado en cadenas de suministro multimodales y versátiles, en lugar de estructuras jerárquicas rígidas.¹

El caso de Bolivia ilustra el perfil de la economía política de los mercados ilícitos. Como se conoce, las economías ilícitas suelen expandirse allí donde las políticas y estructuras estatales crean oportunidades propicias.² De hecho, los gobiernos populistas del MAS, tanto en la presidencia de Evo Morales (2006-2019) como de su sucesor Luis Arce (2020-2025), establecieron una suerte de zona de penumbra entre la legalidad y la ilegalidad, permitiendo que los mercados legales y tradicionales de hoja coca coexistieran con el desvío de la coca a la producción de cocaína.³

Por cierto, la geografía accidentada del país y sus fronteras extensas y porosas, que escapan al control de un Estado frágil e ineficaz en el ejercicio de la soberanía y cuyo monopolio de la violencia se ve constantemente desafiado, tienen mucho que ver con el surgimiento de condiciones propicias para la acción delictiva de actores locales y extranjeros con intereses

¹ Douglas Farah, “La cuarta ola del crimen organizado transnacional en América Latina: nuevos actores extrarregionales y mercados cambiantes transforman las economías ilícitas de América Latina y las alianzas del crimen organizado transnacional”, Gordon Institute for Public Policy, junio de 2024, consultado en: https://digitalcommons.fiu.edu/jgi_research/64/

² Pedro Andreas, *Juegos fronterizos: Vigilando la división entre Estados Unidos y México* (Ithaca: Cornell University Press, 1999); y Ethan A. Nadelmann, “Regímenes de prohibición global: la evolución de las normas en la sociedad internacional”, *Organización Internacional* 44, no. 4 (1990): 479–526.

³ Al respecto, véase la perspectiva de Eduardo Gamarra en su estudio: *Territorios de coca y cocaína: La economía de la droga en Bolivia, los movimientos políticos y el crimen transnacional (2005-2025)*, octubre de 2025, Jack D. Gordon Institute For Public Policy. Nuestro artículo es tributario de muchas de las ideas desarrolladas en el texto de Gamarra sobre los cambios en el mapa económico y territorial de la droga.

convergentes e interrelacionados en el cultivo de coca, su refinación como cocaína, el contrabando hacia los países vecinos, el lavado de dinero, la minería ilegal, la trata y tráfico de personas y otras prácticas espurias y corrosivas.

También ha de tomarse en cuenta que las regiones cocaleras de Bolivia continúan siendo lugares de pobreza extendida. Ello, junto con el hecho de que los programas de desarrollo alternativo y de fomento de cultivos legales, aplicados durante años, arrojaron resultados insatisfactorios sin conseguir afirmarse como opciones frente a la economía coca-cocaína. Tanto en la región del Chapare (Cochabamba), como en los Yungas de La Paz, la producción de coca no ha dejado de crecer y de desviarse a la industria de la cocaína porque, de hecho, ofrece la única respuesta viable para la seguridad y prosperidad de miles de familias campesinas.

A ello se agrega la corrupción endémica en la vida nacional, así como la cooptación del Estado por grupos políticos y corporativos muchas veces ligados a redes delincuenciales. En este sentido, cobra relieve la penetración de estos grupos en el seno mismo de la Policía Boliviana y de las fuerzas del orden que tienen la misión de luchar contra el narcotráfico y otros delitos vinculados, lo cual, sumado a la precariedad de sus recursos y sus evidentes carencias de profesionalismo y probidad, tienen el efecto de neutralizar el combate efectivo de la delincuencia, cuando no de proveer de impunidad y complicidad al crimen organizado.

Todos estos factores explican cómo la economía ilícita tiende a prosperar no sólo por la demanda global de drogas y las redes criminales, sino por la interacción de las estructuras de oportunidad y las condiciones socioeconómicas imperantes. En conjunto, las reflexiones de este informe respaldan la hipótesis de que Bolivia -en el período de los gobiernos del MAS- adquirió los rasgos de un régimen de autocracia electa, en el cual la economía de la droga apuntaló un poder político controlado por un partido hegemónico, a la vez que la criminalidad arraigaba en zonas grises, se infiltraba en las instituciones y expandía su influencia integrando al país con los circuitos globales del tráfico de drogas y otras formas de criminalidad.

Es incontrovertible que la participación de Bolivia en el narcotráfico global se ha acrecentado desde mediados de la década de 2000, acentuando la preocupación de la comunidad internacional. Es así que, en septiembre de 2025, el gobierno de los Estados Unidos descertificó a Bolivia, afirmando que nuestro país había incumplido sus obligaciones internacionales en la lucha contra las drogas.⁴ Una decisión que, por cierto, se daba en circunstancias de una producción récord de cocaína en los países andinos y, sobre todo, delante de una serie de evidencias que mostraban que Bolivia operaba como un importante centro de producción de cocaína y también como una ruta de tránsito para los traficantes.

Por otro lado, irrumpe la actividad minera, especialmente la minería ilegal de explotación de oro en varias regiones del país -especialmente en el norte amazónico del departamento de La Paz-, como una actividad altamente vulnerable a la criminalidad y la penetración de traficantes

⁴ Gobierno de los Estados Unidos, “ Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito de drogas o los principales países de producción ilícita de drogas para el año fiscal 2026”, Departamento de Estado de los EE. UU., 15 de septiembre de 2025, <https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/09/presidential-determination-on-major-drug-transit-or-major-illicit-drug-producing-countries-for-fiscal-year-2026>.

extranjeros, incluso organizaciones internacionales. En efecto, como se expone en este documento, la producción y el comercio de oro es hoy día un negocio por demás propicio a la presencia de actores chinos, brasileños, colombianos, peruanos, entre otros, que engrosan las poblaciones de bolivianos, muchos de estos últimos agrupados en cooperativas mineras o bien dedicados a ocupaciones ligadas con la minería. Hay que enfatizar la interacción de este tipo de minería -mayormente informal, y en muchos casos abiertamente ilegal- con actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y otros delitos.

Así pues, la envergadura que ha ido cobrando la minería ilegal en Bolivia, entrelazada con la economía de la droga, es, hoy mismo, unas de las amenazas peligrosas para la soberanía nacional, la integridad territorial, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad. Y, por ello, uno de los retos más complejos que debe enfrentar el gobierno del presidente Rodrigo Paz, y de quien se espera pueda estabilizar la economía boliviana y reencauzar al país por la senda de la democracia republicana y pluralista, el Estado de derecho y la cooperación con los gobiernos de la región y del mundo desarrollado, lo que incluye la interdicción de las economías ilícitas y el combate al crimen organizado transnacional.

Por último, hay que subrayar la importancia que adquiere el despliegue en América Latina de *estrategias híbridas*⁵, por parte de actores transnacionales, incluso de potencias extranjeras que combinan las actividades económicas lícitas con actividades ilícitas, encubiertas y facilitadas por las redes criminales transnacionales. Reconocer esta realidad es indispensable para comprender el lugar de Bolivia en la geopolítica de las drogas y la criminalidad global; de manera que, partiendo de ello, se diseñen respuestas eficaces concordantes con la evolución de la oferta y la demanda en los mercados internacionales, y a la medida de los entornos políticos e institucionales que los hacen posible.

El perfil de la industria boliviana de la droga

Bolivia ha sido durante mucho tiempo un importante país productor de coca; masticar la hoja de coca es una práctica legal y muy arraigada en la cultura nacional. Hasta hace poco, el país exportaba principalmente hoja de coca cruda o pasta base de coca a las naciones vecinas para su procesamiento. Sin embargo, en los últimos 20 años, la industria de la droga de Bolivia ha evolucionado desde el suministro principal de coca a convertirse en un productor y exportador completo de cocaína.⁶ Los traficantes han desviado las rutas y las cadenas de suministro para aprovechar mejor la geografía de Bolivia y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de producción local. Los clanes de traficantes familiares arraigados en las tierras bajas de Bolivia ahora controlan la mayoría de las operaciones nacionales, actuando como intermediarios entre los cultivadores de coca y los cárteles internacionales. Estos clanes manejan todo, desde la

⁵ El concepto de “guerra híbrida” ha sido desarrollado por el Center For The Study Of Democracy (CSD), en su reciente informe: Shadow Alliances. Authoritarian Powers and the Hybrid Warfare Nexus in Latin America, 2026. <https://csd.eu/publications/publication/shadow-alliances/>

⁶ Fabiola Chambi, Narcotráfico en Bolivia: Dudas y deudas sin resolver, L21, 21 de mayo de 2024, <https://latinoamerica21.com/narcotráfico-en-bolivia-dudas-y-deudas-sin-resueltas/#:~:text=La%20realidad%20es%20que%20Bolivia%20y%20Paraguay%20a%20otros%20mercados>. Véase también, Monica Machicao, “Bolivia endurece el tono sobre los 'mega laboratorios' de cocaína, lo que indica

compra de coca y la operación de laboratorios clandestinos hasta la coordinación de envíos a mercados extranjeros de consumo.

La cadena de suministro de cocaína en Bolivia consta de múltiples capas. Pequeños cocalleros cultivan y venden hoja de coca (legal en cantidades limitadas), que los clanes narcotraficantes bolivianos procesan para obtener pasta de coca o cocaína. Estos traficantes locales luego trabajan con cárteles extranjeros e intermediarios de Brasil, México, Europa y Colombia para contrabandear la cocaína terminada a los mercados globales.⁷

La industria boliviana del narcotráfico se estructura en torno a clases familiares con intensos vínculos locales. Estos clanes han operado durante décadas, particularmente en la región tropical del Chapare, Santa Cruz, Beni y las zonas fronterizas del Altiplano, y han demostrado ser muy organizados y resilientes. Los estudios señalan que son semijerárquicos y especializados, con claras divisiones de trabajo y "jefes" experimentados que reclutan miembros con habilidades técnicas para el procesamiento y la logística de la coca. Ejemplos notorios incluyen los clanes que desde hace tiempo se dedican al contrabando de pasta de coca en avionetas hacia Brasil, Paraguay y Argentina.⁸ Estas redes familiares tan demostrado que manejan métodos de adaptación. Para la década de 2020, los clanes bolivianos no solo suministraban pasta de coca, sino que también cristalizaban clorhidrato de cocaína en el país. El gobierno boliviano reconoció en 2023 la proliferación de megalaboratorios para refinar cocaína, especialmente en el Chapare (un bastión del cultivo de coca), convirtiendo a Bolivia en un país productor de drogas, no solo en una zona de tránsito.

La ubicación geográfica de Bolivia influye en las rutas de tráfico. La cocaína se contrabandea en todas direcciones, lo que parece convertir a Bolivia en un punto nodal para el flujo de drogas del continente. Hacia el este, la mayor parte de la cocaína sale por la porosa frontera de Bolivia con Brasil, especialmente a través de la región de Santa Cruz hacia Mato Grosso (Brasil) y continúa hacia São Paulo/Santos, el principal centro de exportación de Brasil. Las bandas brasileñas luego ocultan la cocaína en cargamentos comerciales (granos, madera, etc.) para su envío a Europa u otros destinos. En el sureste, los traficantes envían drogas a Paraguay y Argentina, utilizando el corredor fluvial Paraguay-Paraná y los puertos argentinos en el Atlántico. Hacia el oeste, la cocaína se traslada a Chile (y ocasionalmente a Perú) para su envío desde puertos del Pacífico o en pequeñas aeronaves a través de los Andes.

Además, vuelos clandestinos ("narcoaviones"), han transportado cocaína hacia el norte a través del espacio aéreo peruano y boliviano, hacia mercados fuera de la región. Las remotas pistas de aterrizaje en las tierras bajas de Bolivia y las zonas fronterizas poco controladas, como San Matías, en la frontera con Brasil, sirven como puntos clave de despacho. Estas diversas rutas resaltan el papel de Bolivia como una suerte de corredor para el tráfico hacia las naciones vecinas, Europa e incluso Asia.

⁷ Nicolas Lien y Gabriel Feltran, "Cadenas (ilícitas): algunas nuevas hipótesis sobre un mercado global de cocaína cambiante", *Journal of Illicit Economies and Development*, volumen 7, número 1 (11 de marzo de 2025): 20-34, <https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.274>.

⁸ "Índice Global de Delincuencia, Bolivia", Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, 2021, https://ocindex.net/assets/downloads/2021/english/ocindex_profile_bolivia_2021.pdf.

A principios de la década de 2020, Bolivia era el tercer mayor productor mundial de coca/cocaína, solo detrás de Colombia y Perú.⁹ El cultivo de coca, que había fluctuado entre unas 20.000 y 30.000 hectáreas desde 2005, comenzó a aumentar de nuevo; para 2021 alcanzó las 30.500 hectáreas (según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), un 4% más que el año anterior. La ONUDC estima que la producción de cocaína pura de Bolivia superó las 300 toneladas anuales a mediados de la década de 2020, aunque las cifras exactas varían. La producción récord de cocaína en los Andes, que "aumentó un 35% entre 2020 y 2021" a nivel mundial, se ha reflejado en Bolivia, abrumando a las fuerzas del orden. Las incautaciones en Bolivia aumentaron un 62% en 2023 con respecto a 2022, lo que indica una interdicción más eficaz o simplemente un mayor movimiento de cocaína (probablemente ambos). Sin embargo, las incautaciones probablemente solo capturan una pequeña fracción; los expertos sugieren que solo se intercepta aproximadamente el 10% de la cocaína.

No obstante, las autoridades de gobierno han propendido a minimizar la dimensión real de la producción nacional de cocaína, insistiendo durante mucho tiempo en que el país era principalmente una ruta de tránsito para la cocaína peruana. Esta retórica ha cambiado bajo la presión de los hechos, siendo cada vez más innegable que los narcotraficantes están convirtiendo a Bolivia en país productor de drogas con laboratorios a escala industrial. Sintetizando, el narcotráfico en Bolivia es ahora una industria integrada verticalmente (desde los campos de coca hasta los laboratorios de cocaína y los oleoductos de exportación) dirigida por actores locales en colaboración con grupos criminales transnacionales.

Política de control social y la gobernanza local

La asunción a la presidencia de Evo Morales en 2006 cambió la estrategia de reducción y comercio de los cultivos de coca. Morales, líder sindical del movimiento cocalero, llegó al poder con la promesa de poner fin a la era de represión violenta y de devolver la dignidad a los productores de coca. En lugar de la erradicación indiscriminada, se puso en marcha el control comunitario de las plantaciones. Esta política formalizó el sistema de "catos", permitiendo el cultivo legal limitado de coca en zonas específicas -incluido el Chapare, que antes había sido zona de plantación ilegal-, al tiempo que facultaba a los sindicatos cocaleros para vigilar su cumplimiento. Los cultivadores debían registrarse ante el Estado y recibir la autorización para cultivo de un cato por familia; cualquier excedente estaba sujeto a la remoción. De este modo, el gobierno se asoció con los sindicatos cocaleros para imponer límites a la producción de la hoja de coca, convirtiendo a los antiguos perseguidos en colaboradores en la aplicación de la norma.

Se debe reconocer que este modelo de control social y reducción participativa de cultivos, al principio mostró resultados positivos: Bolivia logró una disminución constante en la superficie de coca de 2010 a 2014, alcanzando los niveles más bajos de cultivo en una década. Las encuestas de la UNODC confirmaron una caída del 26 por ciento en el área de cultivo de coca entre 2010 y

⁹ Samantha Schmidt, Arturo Torres y Anthony Faiola, "Un auge mundial en el tráfico de cocaína", *The Washington Post*, de diciembre de 2024, <https://www.washingtonpost.com/world/2024/12/28/cocaine-consumption-soars-europe-asia/>.

2013, lo que redujo el cultivo de coca de Bolivia a aproximadamente 23.000 hectáreas. El gobierno se ufano de haber alcanzado estos resultados sin los conflictos violentos que marcaron los programas de erradicación del pasado, respaldados por Estados Unidos y con la intervención de la DEA. De hecho, algunos observadores destacaron el experimento de Bolivia como un caso excepcional en el que un país productor de drogas redujo los cultivos ilícitos evitando los enfrentamientos militarizados.¹⁰

Con todo, el juego de equilibrios de Morales entre los cultivadores de coca y las normas internacionales de control de drogas estuvo signado de contradicciones. Mantuvo un discurso de combate al narcotráfico, al mismo tiempo que los campos de coca -parcialmente regulados del Chapare- continuaron alimentando el comercio de cocaína. Evo festejaba las reducciones en la coca cruda cuando, en realidad, Bolivia transitaba desde la producción de hoja de coca y pasta base a su transformación y exportación de cocaína. De hecho, tras la expulsión de la DEA estadounidense (2008) se verificó una proliferación de laboratorios de cocaína, a menudo operados por profesionales y traficantes extranjeros atraídos por la abundancia de coca del Chapare y la presencia disminuida de las fuerzas del orden.¹¹ Para 2014, Bolivia ya era considerada como el tercer mayor productor de cocaína del mundo después de Colombia y Perú, estimándose que más del 90 por ciento de la coca boliviana estaba siendo desviada a los mercados ilícitos. El gobierno del MAS optó por incrementar la cuota legal de coca (de 12.000 a 22.000 hectáreas en todo el país), admitiendo la existencia de más cultivos como legales, mientras ocasionalmente se allanaban laboratorios de cocaína y se insistía en que no había protección oficial al tráfico de drogas.

Uno de los fenómenos más singulares de las regiones cocaleras de Bolivia -principalmente el Chapare- es el empoderamiento de los sindicatos como autoridades paralelas, de facto, y con el poder real que regular las condiciones sociales, económicas y de seguridad en la región. Tanto así que son los dirigentes sindicales quienes asignan tierras a los nuevos colonos, median en disputas, hacen cumplir las normas comunales y desempeñan otras funciones que corresponden a las agencias gubernamentales. En ausencia de una presencia estatal efectiva, ha surgido un sistema de gobernanza informal que enfatiza los derechos colectivos y la resolución de conflictos a través de las organizaciones locales. Ello, desde luego, tiene profundas implicaciones para el tráfico de cocaína: en lugar de estar dominado por cárteles violentos, la economía de la droga estaría entrelazada con las estructuras sociales y comunitarias.¹²

¹⁰ La Ley General de la Coca (Ley 906) de 2017 formalizó un total de 22.000 hectáreas (ha) de coca legal en todo el país (14.300 ha en los Yungas de La Paz y 7.700 ha en el Chapare); un aumento con respecto al límite anterior de 12.000 ha. Los sindicatos de los Yungas inicialmente apoyaron la idea de una ley específica para la coca, pero se opusieron firmemente a la asignación de nuevas hectáreas legales al Chapare, argumentando que este produce coca principalmente para la producción de cocaína y no para uso cultural.

¹¹ Naciones Unidas, "El 94% De La Coca De Chapare No Pasa Por El Mercado Legal", Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito", https://www.unodc.org/bolivia/es/press/entrevista_erbol.html, consultado el 1 de septiembre de 2025.

¹² Es el caso del clan Mamani Mamanillo, de México Chico. Liderado por los hermanos Hipólito (*El Popular Escáner*) y Omar (*El Gordo*) Mamani Mamanillo, este clan pasó de ser un pequeño contrabando a una importante organización criminal. Inicialmente contrabandearon mercancías y luego se especializaron en vehículos robados (autos *chutos*) de Chile, asociándose con redes de robo de autos dirigidas por bolivianos en Chile. La policía boliviana confirma que estas mafias gestionan el movimiento de cocaína y la producción local de marihuana en la zona. Paredes, "México Chico, el pueblo donde el narco y los autos robados pasan sin control", *Ibid.*

En contraste con lo que ocurre en México, Colombia y Ecuador, el negocio de cocaína en Bolivia ha sido menos violento, con relativamente pocos casos de guerras entre grupos criminales. Los sindicatos de cocaleros parecen resistir la entrada de cárteles extranjeros que podrían alterar el orden establecido, lo cual podría explicar por qué la industria de drogas de Bolivia no ha desencadenado las manifestaciones de violencia a gran escala que se ve en otros lugares. Naturalmente, nada garantiza que esto no vaya a cambiar en el futuro. Si tal estabilidad se erosiona por las luchas políticas faccionales, las tensiones económicas o las pugnas entre bandas criminales, el clima de violencia podría aumentar, tanto en las regiones productoras como en las ciudades.

Clanes familiares y conexiones internacionales

Como ya se dijo, el negocio de narcóticos en el país está dominado por clanes familiares extendidos que operan como minicárteles. En 2025, las autoridades admitieron la presencia de al menos 17 clanes en el territorio nacional. Según la ONUDD, son grupos que priorizan mantener un flujo constante de productos y evadir los controles estatales mediante la cooperación con otros actores a lo largo de la cadena de suministro. Las tareas se muestran divididas: una red familiar podría gestionar el transporte transfronterizo, otra las casas de seguridad y el almacenamiento, y otra el lavado de dinero, formando así parte de una colaboración transnacional más amplia en lugar de un solo cártel jerárquico. Este modelo descentralizado pero interconectado ha permitido a los clanes bolivianos integrarse en los circuitos globales del narcotráfico, que gestionan la exportación de drogas más allá de Sudamérica.¹³

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU, los grupos familiares bolivianos y peruanos cooperan con otros actores del crimen organizado en todo el mundo para transportar y distribuir cocaína. En Chile, los clanes bolivianos se han asociado con pandillas locales (a menudo lideradas por expatriados bolivianos) para la logística y el cruce de fronteras. Más intrigante aún, ha surgido evidencia de la presencia de un cártel mexicano a lo largo de las rutas Bolivia-Chile-Pacífico.¹⁴ El modus operandi consistía en enviar cocaína semiprocesada (pasta base) desde Bolivia a Chile, para su transformación en clorhidrato de cocaína de alta pureza a nivel nacional, un esquema similar al cargamento de 150 kg de pasta de coca interceptado en el puerto de Arica en 2023 con destino a Oriente Medio.

Una vez que la cocaína (u otra droga) sale de Bolivia hacia Chile, el producto ingresaría a una cadena logística en la Cuenca del Pacífico. La infraestructura portuaria de Chile, sus zonas francas y sus conexiones internacionales de transporte marítimo, convierten a este país en un punto de

¹³ Naciones Unidas, *Informe Mundial sobre las Drogas 2025*, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, junio de 2025, <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html>; y "Informe de drogas de la ONU identifica clanes familiares involucrados en el tráfico de cocaína en Bolivia", *Vision 360*, 25 de junio de 2025, <https://www.vision360.bo/noticias/2025/06/26/27359-informe-de-drogas-de-la-onu-identifica-clanes-familiares-involucrados-e-n-el-trafico-de-cocaina-en-bolivia#:~:text=Estas%20redes%20suelen%20cooperar%20con,dinero%2C%20indica%20un%20reporte%20EFE>.

¹⁴ A fines de 2023, un laboratorio clandestino de cristalización de cocaína fue desmantelado en Maipú en Santiago, Chile; estaba refinando base de coca probablemente de Bolivia, y los investigadores vincularon la operación al CJNG de México. Cf. Alvarado, "De Chile a México, la nueva ruta marítima de la cocaína revelada por Naciones Unidas", *Ibid.*

despacho atractivo para los cargamentos internacionales de droga. Durante la última década, Chile se ha transformado de un país de tránsito menor a una importante plataforma para el contrabando marítimo de larga distancia. Esto se debe a la búsqueda de rutas menos vigiladas por parte de los traficantes, así como a su geografía: Chile limita con Perú y Bolivia, dos importantes fuentes de cocaína. Los traficantes han explotado diversos puertos chilenos desde el norte hasta el centro de Chile. En el extremo norte, los puertos de Arica (cerca de la frontera con Perú) e Iquique (cerca del departamento boliviano de Oruro) son puntos de salida lógicos para las drogas que llegan desde Bolivia.¹⁵

Lo cierto es que a menudo la cocaína sudamericana se dirige a los mercados de Asia-Pacífico a través de rutas marítimas que cruzan el océano Pacífico. Australia, en particular, se ha convertido en un objetivo muy lucrativo.¹⁶ En lugar de dirigir todo el producto a Estados Unidos o Europa, los traficantes comenzaron a mover algunos cargamentos hacia el oeste a través del Pacífico. Los precios de la cocaína en Australia se encuentran entre los más altos del mundo, lo que refleja la escasez y la fuerte demanda, lo que la convierte en una ruta muy lucrativa, según expertos en seguridad. Un kilogramo de cocaína puede alcanzar un precio varias veces mayor en Sídney que en Los Ángeles o Madrid. En consecuencia, los traficantes latinoamericanos (colombianos, mexicanos y sus proveedores bolivianos) han buscado formas de llegar a Australia y a los países vecinos de Oceanía.

Un aspecto destacado es la creciente presencia de redes extranjeras del crimen organizado. A medida que el mercado mundial de cocaína florecía y se diversificaba, los grupos criminales de Brasil, México, Europa y Colombia penetraban cada vez más en Bolivia para abastecerse de cocaína o asegurar rutas de contrabando. En contraste con los que sucedía en Colombia en la década de 1980 (dominada por cárteles monolíticos), el narcotráfico boliviano actual se caracteriza por acuerdos de colaboración entre clanes locales y múltiples mafias extranjeras. Los hechos conocidos sugieren que ningún cártel controla Bolivia; la situación sería una en la que organizaciones negocian y gestionan la logística.¹⁷

El negocio floreciente de la minería ilegal

La primera Evaluación Nacional de Riesgos, realizada en 2023 por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), organismo boliviano encargada de prevenir, controlar y combatir los delitos relacionados con la legitimación de ganancias ilícitas, catalogó al lavado de activos como un riesgo emergente en Bolivia. No obstante, a día de hoy, este organismo ha cambiado la tipificación de la minería ilegal como “riesgo emergente” a un riesgo real alto para el país, en concordancia con la tipología establecida por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y dado el carácter comprobadamente transnacional de las prácticas de minería ilegal.¹⁸

¹⁵ El puerto de Arica, por ejemplo, tiene una gran presencia comercial boliviana (sirve como salida marítima de Bolivia en virtud de un tratado), y los traficantes han ocultado cocaína en cargamentos situados allí.

¹⁶ Las autoridades y los analistas observaron una "nueva ruta" de tráfico de cocaína hacia Oceanía a mediados de la década de 2010.

¹⁷ Samantha Schmidt, Arturo Torres y Anthony Faiola, “Un auge mundial en el tráfico de cocaína desafía décadas de esfuerzos antidrogas”, *The Washington Post*, 28 de diciembre de 2024.

¹⁸ El GAFILAT agrupa a 18 países de la región, y su misión es prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del

Esta decisión oficial refleja la importancia que ha adquirido en los últimos años la minería ilegal en Bolivia, constituyéndose en una pieza central de la economía ilícita en Bolivia, y en torno a la cual convergen y se entrelazan productores y traficantes de distintas nacionalidades, mayormente chinos, brasileños, colombianos y peruanos, junto con una creciente población boliviana; inclusive organizaciones criminales transnacionales. En efecto, en un proceso de varios años, muchos emprendimientos de la minería ilegal pasaron a ser financiados por el narcotráfico y el lavado de dinero; los contrabandistas a su vez se vincularon con los narcotraficantes; el tráfico y trata de mujeres creció en los campamentos y poblados de la minería –principalmente del oro en el piedemonte amazónico–. Y todo ello nutriéndose con corrupción en las esferas institucionales, políticas, económicas y sociales.

Se estima que un 80% de la actividad minera informal se dedica al oro, lo que arrojaría un movimiento económico de aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales. La población inmersa directa o indirectamente a la extracción de minerales se calcula entre 500 mil a un millón de personas, asentadas en campamentos precarios, poblados de paso, pueblos y ranchos de comunidad, e incluso urbes intermedias, prácticamente a lo largo y ancho de la geografía nacional, pero mayormente en la región amazónica formado por los departamentos de La Paz, Beni y Pando. El actor socioeconómico predominante es el sector de cooperativas o empresas comunitarias mineras, compuestas por decenas o centenas de jornaleros, las más de ellas empleando métodos extractivos y depredadores de parajes, ríos y yacimientos mineros de toda índole, desalojando, de ser necesario, a las empresas mineras legales instaladas previamente en alguna locación convertida en objeto del apetito minero informal.

Pero el oro sería también el recurso de mayor interés para la China y otros países de la región Asia Pacífico. Si bien en Bolivia se registra la presencia de algunas empresas chinas en actividades de producción y comercialización de minerales, es en la economía ilegal de la extracción de oro donde la participación del gigante asiático destaca. Desde ya, se constata un flujo creciente de inmigrantes legales e ilegales de esa nación, motivado por las altas expectativas de ganancias que genera la explotación del oro y su abundancia en diversas cuencas y ríos del país. La inmigración china, con el paso del tiempo, se ha ido juntando y asociando con la población local organizada en cooperativas y comunidades productivas.

Las zonas auríferas pueden ser también lugares de violencia. De hecho, informes de prensa reportan ocasionalmente enfrentamientos entre grupos de traficantes, cooperativas y comunidades locales -incluso con intervención de grupos armados de extranjeros-, por el control de zonas auríferas, y también para impedir el ingreso de fuerzas policiales y del ejército boliviano.¹⁹

compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

¹⁹ ERBOL: “Cooperativas, oro y criminalidad: Crónica de la violencia anunciada Yani”

(<https://erbol.com.bo/nacional/cooperativas-oro-y-criminalidad-cr%C3%B3nica-de-la-violencia-anunciada-en-yani>); <https://brujuladigital.net/economia/pugna-por-el-control-de-zonas-auriferas-genera-conflictos-en-el-norte-de-la-paz>

Contrariamente al fenómeno de inmigración masiva de nacionales chino, en Bolivia no se detecta la presencia ni de grupos ni de ciudadanos rusos o de iraníes en las redes de la minería ilegal. En estudios previos de la Fundación Milenio se demostró que la influencia de Rusia en Bolivia ha sido de naturaleza fundamentalmente política y diplomática. Y lo mismo podría decirse del caso de Irán. En contraste con la fuerte presencia de empresas chinas -sobre todo contratistas de obras públicas-, de los créditos de bancos oficiales chinos a Bolivia, y de un comercio bilateral creciente y asimétrico a favor de las importaciones de China, las relaciones económicas, comerciales y financieras de Bolivia con Rusia han sido limitadas.²⁰ Esto, sin perjuicio del interés que se advierte en el Kremlin por plantar presencia en algunos sectores con potencial estratégico, como es el caso de la extracción del litio boliviano.

En suma, y según refiere la máxima autoridad de la AJAM²¹, sería palpable el interés de empresas chinas de emprender inversiones en proyectos de explotación de plata, zinc, antimonio y otros minerales. También sería este el caso de empresas rusas, aunque en menor medida. No obstante, a falta de más información no es posible conocer el alcance de estas manifestaciones de interés

Criminalidad y cooptación del Estado

La lucha de Bolivia contra el narcotráfico ha sido fuertemente condicionada, y muchas veces obstaculizada por los procesos políticos. Irónicamente, Evo Morales saltó a la fama como líder de un sindicato de cocaleros. Ya en el ejercicio del poder, Morales implementó una política de "soberanía cocalera", legalizando una cantidad limitada de cultivo de coca, empoderando a los sindicatos locales para autocontrolar los excesos y expulsando a agentes antidrogas estadounidenses en nombre de la dignidad nacional. En 2008, Morales expulsó a la DEA estadounidense, acusándola de conspiración. A partir de ese momento, Bolivia adoptó la política de actuar por su propia cuenta. La cooperación con Estados Unidos y algunos países vecinos disminuyó, aunque continuó trabajando con la ONU y los organismos regionales en sus propios términos.

Los críticos del gobierno del MAS argumentan que su política de control social de la coca, en realidad abrió la puerta a un mayor desvío para la producción de cocaína. Al permitir que se cultivara más coca legalmente, el gobierno del MAS podría haber suministrado inadvertidamente la materia prima a los procesadores de cocaína. Y aunque los voceros de gobierno siempre negaron que el narcotráfico hubiera penetrado el Estado, y defendieron que Bolivia no ha cejado en combatir los narcóticos, hay múltiples videncias que cuentan una historia diferente. Evo Morales, por su parte, protagonizando una lucha fratricida con su sucesor presidencial Luis Arce, no se cansó de acusar a éste de proteger la narcocorrupción. Este respondió suspendiendo a funcionarios y ordenando investigaciones, al tiempo que insinuaba que las redes arraigadas podrían remontarse al mandato de Morales. Estas acusaciones son síntomas de cuán entrelazadas se hallan la corrupción del narcotráfico y la política.

²⁰ Cf. *Bolivia y Rusia. Relaciones asimétricas y alineamiento geopolítico*, Fundación Milenio, Serie Análisis N° 37, 2024; "Informe sobre la influencia de potencias autoritarias en Bolivia. Contexto económico, sectores y actores relevantes", 31 de enero de 2026 (documento entregado al CSD, Actividad 1)

²¹ Entrevista con Jaime Sanabria, Director Ejecutivo Nacional de la AJAM, para la presente investigación.

También es incontrovertible que la actuación de las fuerzas de seguridad se ha visto socavada por la infiltración del narco. Al menos 30 policías fueron investigados por delitos de narcotráfico entre 2022 y 2023, y muchos evitaron sanciones graves y regresaron al servicio.⁸⁷ Los casos abarcan desde policías locales hasta oficiales de alto rango que blanquean dinero.

Las fuerzas armadas tampoco han sido inmunes; existen informes de militares que ignoran vuelos de cocaína en regiones remotas. Lo propio cabe decir de la actuación de jueces y fiscales que, en muchos casos, han eludido investigar y/o enjuiciar a conocidos narcos o bien evitado dictar sentencias firmes y oportunas, dejando una estela de impunidad. En ocasiones, y frente a hechos flagrantes, la presión pública ha terminado forzando a que ciertas autoridades judiciales sean procesadas por negligencia, complicidad y corrupción. También hay que decir que la corrupción se ve facilitada por la interferencia política y una cultura de impunidad arraigada en la sociedad. Este mal endémico engrasa los engranajes de la criminalidad, haciendo que las instituciones competentes se muestren renuentes o incapaces de enfrentar agresivamente a los principales culpables.

Amenazas autoritarias latentes

El concepto de “capital corrosivo”, desarrollado en el libro de la Fundación Milenio *El capital corrosivo y los retos de buena gobernanza* (2021), sintetiza un importante fenómeno que se ha sentido Bolivia, lo mismo que en otros lugares de la región: la presencia de capitales pertenecientes o vinculados a Estados autoritarios que sacan partido de la debilidad del sistema institucional y la falta de seguridad jurídica en otro país para hacer pingües ganancias, a la vez que cooperan con los gobiernos autocráticos y populistas locales que evaden la ley y la rendición de cuentas.

Precisamente, este ha sido el caso del régimen del MAS, a cuya permanencia en el poder contribuyó el respaldo económico y político de China y en menor medida de Rusia. El trabajo de la Fundación Milenio demostró cómo las deficiencias institucionales y de gobernanza posibilitaron que las relaciones entre Bolivia y China, Rusia, Venezuela y otros gobiernos del mismo signo tuvieran el efecto de agravar los problemas de corrupción. De esta manera, los contratos de obras públicas adjudicados a compañías extranjeras y nacionales derivaron en pésimos resultados, derrochándose los recursos financieros y naturales del pueblo boliviano en beneficio de esas compañías y de otros actores políticos y corporativos corruptos, con muy poco provecho duradero para Bolivia. Lo cual, además, resulta siendo funcional a los intereses de potencias extranjeras que promueven modelos autoritarios de gobierno y tratan de consolidar alianzas para su expansión económica y geopolítica.

Ahora bien, el avance de la investigación sobre la cuestión de la criminalidad y la influencia autoritaria extranjera pone de relieve, de un lado, la persistencia de un cúmulo de falencias del Estado boliviano, y de otro, cómo estas falencias hacen de Bolivia un país altamente vulnerable a la penetración y la influencia perniciosa de traficantes de drogas asociados con organizaciones internacionales. Se debe enfatizar que ambas cuestiones han marcado el desenvolvimiento de la economía y la política boliviana durante las últimas dos décadas.

Si bien no hay evidencia verificable de que los gobernantes de esta última etapa hubiesen estado coludidos con el narcotráfico, el nexo entre los narcotraficantes y funcionarios del Estado es innegable. La larga historia de narcocorrupción en Bolivia -desde el régimen del "golpe de la cocaína" de Luis García Meza en la década de 1980, cuando oficiales militares se asociaron con narcotraficantes, hasta los escándalos recientes- ha creado un legado de enorme desconfianza. La política del MAS de defensa de la soberanía y la economía tradicional de la coca tuvo algunos méritos innegables, como la disminución de conflictos violentos por la erradicación de cultivos de coca. Sin embargo, es también indiscutible que dejó vacíos que la criminalidad ha llenado resueltamente. La expulsión de la DEA y las tensas relaciones con el gobierno norteamericano significaron menos ayuda en inteligencia y menos financiamiento para la interdicción en Bolivia, al tiempo que la corrupción florecía.

¿Momento de inflexión?

La noticia impactante de los últimos días ha sido sin duda la captura en la ciudad de Santa Cruz, el 13 de marzo, del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, luego de más de 2 años de una intensa persecución tanto en Bolivia como en otros países vecinos. Marset ha sido inmediatamente trasladado a Estados Unidos por agentes de la DEA, y donde ahora guarda detención en una prisión de alta seguridad. Sebastián Marset, considerado líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, era uno de los narcos más buscados del continente; requerido en Bolivia y Paraguay por narcotráfico y otros delitos, también suma cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas en los Estados Unidos. De hecho, la DEA ofrecía pagar hasta US\$2 millones por colaboración para detenerlo.²² No obstante, el narco uruguayo burló en repetidas ocasiones a la Policía boliviana, y a las fuerzas de seguridad de naciones vecinas, mientras se ufanaba en videos que difundía en redes sociales de que podía encontrarse en cualquier lugar y que nunca sería atrapado; llegó incluso a acusar al gobierno del expresidente Luis Arce de ser cómplice de los hechos por los cuales se lo perseguía. La osadía de Sebastián lo llevó a incursionar en el fútbol, fue miembro de un club deportivo y hasta fue captado en imágenes ante las cámaras de medios de prensa, pero, pese a ello, su paradero era desconocido.²³

La captura de Sebastián Marset se produjo pocos días después de que el presidente Donald Trum, reuniera en Miami, el 7 de marzo, a 12 presidentes latinoamericanos, considerados afines al mandatorio estadounidense, para firmar su adhesión al "Escudo de las Américas", entre ellos el

²² "Capturan en Bolivia al uruguayo Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados del mundo, y lo extraditan a EE.UU." (<https://www.bbc.com/mundo/articles/c99jd727dgeo>); "Gobierno reconoce que Bolivia era el centro de operaciones de Marset" (https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-reconoce-bolivia-era-centro-operaciones-marset_1773447492); "EE.UU. celebra captura de Marset en Santa Cruz y destaca cooperación policial con Bolivia" (https://eldeber.com.bo/pais/ee-uu-celebra-captura-marset-santa-cruz-destaca-cooperacion-policial-bolivia_1773421326).

²³ En Bolivia, Marset era investigado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, tráfico de armas, legitimación de ganancias ilícitas, privación de libertad, asociación delictuosa y organización criminal. Su estadía en Bolivia llevó a que salpique a funcionarios de Migración en Beni, donde se abrieron investigaciones por presuntamente favorecer al narcotraficante con su documentación. El comandante General de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, dijo que "hay información de que policías habrían ayudado con información a Sebastián Marset en el pasado, pero que eso se aclarará mediante la investigación que ya está en curso".

https://eldeber.com.bo/pais/policias-habian-brindando-informacion-marset-operativos-pasado-dijo-sokol-anuncio-investigacion-dentro-institucion-verde-olivo_1773507498

boliviano Rodrigo Paz. El Escudo de las Américas está concebido como una alianza militar y de seguridad para combatir el narcotráfico, compartiendo inteligencia y coordinando operaciones para atacar y dismantelar a los carteles de la droga. Sin embargo, la iniciativa de la Casa Blanca parece formar parte de un esfuerzo más amplio por reposicionar a Estados Unidos como potencia hemisférica hegemónica. Ello implicaría afianzar alianzas políticas, negociar acuerdos comerciales bilaterales, limitar la presencia de otras potencias globales, principalmente China.²⁴

Se entiende así el tono celebratorio del mensaje difundido por el Departamento de Estado, con motivo de la captura de Marset, hecho atribuido al liderazgo del presidente Rodrigo Paz, y también a la cooperación impulsada por Washington para combatir el crimen transnacional. “El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, señala el comunicado oficial. El presidente boliviano, por su parte, ha calificado la detención del narco uruguayo como “hecho histórico”; un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. “Este no es un hecho aislado, es el inicio de una serie de acciones que reflejan la determinación de nuestro gobierno de hacer de Bolivia un país libre del crimen organizado, del narcotráfico, la corrupción y la impunidad”, ha señalado.²⁵

Pues bien, la captura de Marset (aunada a otras operaciones más agresivas de erradicación de coca y destrucción de fábricas de cocaína en el Chapare) configuraría un punto de quiebre en el combate al narcotráfico y la criminalidad en Bolivia, quedando atrás la política de “coca no es cocaína”, defendida por los gobiernos del MAS, tanto como su tajante rechazo a la intervención de la DEA en los esfuerzos de interdicción de drogas.

Estrategia de seguridad integral

Como se ha visto líneas arriba, son variados los factores para entender por qué Bolivia se ha transformado en un nodo crítico de la industria global de la cocaína: las dimensiones del cultivo de coca, el avance a la producción de cocaína, la centralidad geografía y logística del país, la articulación con cárteles transnacionales, el poder estatal debilitado y la pérdida de soberanía confluyen para posicionar a Bolivia como un proveedor crecientemente relevante y un punto de tránsito del tráfico internacional.

Por cierto, esas dinámicas se ven reforzadas por los cambios globales descritos por Douglas Farah como la "Cuarta Ola Criminal Transnacional", y que Gamarra recoge en su estudio ya citado. Según aquel autor, la disminución de la demanda estadounidense y el aumento del consumo europeo habrían convertido a Europa en el mercado de cocaína más atractivo, mientras que los actores extrarregionales buscan instalarse en los países productores de la región Andina. Para Gamarra, “el departamento de Santa Cruz ejemplificaría esta transformación, albergando a connotados traficantes y a emisarios de mafias europeas y bandas brasileñas que ahora parecen interesados en administrar las cadenas de suministro en origen.”²⁶

²⁴ “Escudo de las Américas: con los ojos en el narco y en China”, <https://www.dw.com/es/escudo-de-las-am%C3%A9ricas-con-los-ojos-en-el-narco-y-en-china/a-76296246>

²⁵ https://eldeber.com.bo/pais/presidente-paz-brinda-informacion-detallada-captura-sebastian-marset_1773415446

²⁶ Gamarra, *Ibid.*, p. 47.

Lo cierto es que la trayectoria de Bolivia entre 2005 y 2025 demuestra cómo las economías ilícitas pueden prosperar en regímenes autocráticos y populistas, los cuales, para perpetuarse en el poder deben hacer la vista gorda de las actividades delictivas, tolerar la corrupción y la impunidad, facilitar los flujos financieros corrosivos e inclusive ceder a las presiones de poderes extranjeros que quieren proyectar su influencia geopolítica, económica y diplomática más allá de sus zonas tradicionales.

Delante de este complejo panorama, el nuevo gobierno de Rodrigo Paz tiene el reto de restaurar la credibilidad de Bolivia en el cometido de prevenir, controlar y combatir los delitos asociados con la criminalidad transnacional y sus conexiones reales o potenciales con potencias autoritarias, partiendo por dotar al Estado boliviano de una estrategia de seguridad para enfrentar los delitos, riesgos y amenazas. Una estrategia nacional y ciudadana, con enfoque integral y primordialmente preventivo, pero también con medidas punitivas eficaces, ajustadas a la legalidad y el respeto a los derechos humanos. En ese marco, las acciones primordiales serían las siguientes:

Reforma policial: No es posible mejorar la seguridad pública ni fortalecer la lucha contra la criminalidad sin una Policía fuerte, moderna, profesional, honesta y cercana a la gente. El sistema académico policial requiere cambios para una formación especializada y calificada. Se debe mejorar los salarios por un mejor desempeño profesional y frenar la corrupción. Desconcentrar funciones policiales y fortalecer las unidades operativas y técnicas. Aumentar su presupuesto y dotarla del equipamiento necesario. Reforzar el trabajo de Policía Comunitaria en cooperación con los gobiernos municipales y los vecinos organizados. Y, ante todo, liberar a la Policía del tutelaje y la instrumentalización política, afirmando su condición de institución estatal, obediente a la Constitución y con la misión centrada en la defensa de la sociedad y el orden público.

Justicia eficaz. La reforma policial tiene que estar secundada por el trabajo de jueces y fiscales idóneos, probos, imparciales y ajenos a la influencia política y de otros grupos de poder. De ahí la importancia capital de rescatar el Poder Judicial y el Ministerio Público de su captura política y de acabar con la corrupción y la inoperancia judicial.

Cooperación internacional. Dada la reconfiguración geopolítica del narcotráfico y su carácter transnacional, la colaboración con las agencias internacionales y organismos policiales nacionales debe fortalecerse y ampliarse, reconstruyendo la confianza con los vecinos, socios y países con los que compartimos responsabilidades. La cooperación debe comprender el intercambio de información e inteligencia, la vigilancia de fronteras, el rastreo de vuelos, la coordinación de operaciones de interdicción, el control del lavado de activos y otros delitos. Nuestro gobierno tiene que demostrar un firme compromiso para dismantelar las estructuras criminales y las redes de protección desde el Estado.

Cultivos excedentarios: Reafirmando el respeto al uso tradicional de la coca, el Estado no puede desentenderse de la obligación de contener la expansión de cultivos y de lograr que la producción excedentaria de coca se elimine o se industrialice en productos legales, lo que conlleva revitalizar

los programas de desarrollo en las regiones cocaleras, de manera de disminuir la dependencia de la población campesina de la economía de la coca-cocaína.²⁷

Minería ilegal: La complejidad de la tarea gubernamental es aún mayor habida cuenta el *boom* de la minería ilegal y especialmente de la minería del oro en zonas fronterizas, impulsada por el alza de precios internacionales que atrae a cada vez más empresas, comerciantes, contrabandistas y traficantes, tanto bolivianos como extranjeros. La evidencia abrumadora de la vinculación de la actividad minera con el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y otros delitos, trazan un escenario peligroso y potencialmente violento que podrían rebasar la capacidad de control del Estado.

En suma, el fin del ciclo del MAS y el advenimiento de una nueva etapa política en Bolivia presentan una oportunidad para intentar un cambio de rumbo sustantivo. Las reformas que recuperen la integridad de las instituciones nacionales y renueven la cooperación internacional pueden reconstruir gradualmente la confianza y la eficacia del Estado boliviano. Como ya se dijo la lucha contra el narcotráfico y los otros delitos asociados es compleja y transnacional por naturaleza; ningún país puede encararla por su propia cuenta. La experiencia de Bolivia, al excluir a ciertos aliados como Estados Unidos, entretanto proliferaban las redes criminales, es elocuente del peligro del aislamiento.

De cara al futuro, los bolivianos deberán conciliar sus legítimas preocupaciones sobre la soberanía con la necesidad pragmática de colaborar contra una amenaza compartida. Solo con una estrategia integral -que aborde todos los problemas, desde el narcotráfico, la minería ilegal, las finanzas de los cárteles, la corrupción funcionaria y la pobreza en las comunidades cocaleras- podrá Bolivia recorrer una ruta de salida del lugar que ocupa en la geopolítica de las drogas, a la vez que refuerza su resiliencia ante el capital corrosivo y las amenazas subyacentes de las potencias autoritarias, afianzando el Estado de derecho y la gobernanza democrática del país.

²⁷Para el politólogo Eduardo Gamarra (*Ibid*), cualquier cambio en la política de reducción de cultivos debe incluir el diálogo con los sindicatos cocaleros, de modo de evitar una reacción violenta de estos, pero sin perder de vista que la producción excedentaria que alimenta el comercio ilícito es insostenible. Enfrentar este desafío será una verdadera prueba para el gobierno de Rodrigo Paz.